

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
Medellín, veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral instaurado por BLANCA INÉS PALACIOS AGUDELO en representación de su hija SARA ELENA MONTOYA PALACIOS contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-020-2019-00267-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a la abogada Leidy Marcela Álvarez Román, con tarjeta profesional No. 278.531 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

ANTECEDENTES

Pretende la demandante el reconocimiento y pago de la sustitución pensional en favor de la menor, causada por la muerte de María del Socorro Agudelo Agudelo ocurrida el 06 de febrero de 2017, quien fungió como su madre de crianza, con los correspondientes intereses de mora que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas procesales.

Como fundamento a sus pretensiones narró que María del Socorro Agudelo Agudelo falleció el 06 de febrero de 2017, cuando percibía una pensión por vejez reconocida por Resolución SUB 296574 del 27 de diciembre de 2017, quien fungía como la abuela de Sara Elena Montoya Palacios en condición de discapacidad en razón a una pérdida de capacidad laboral del 87.50%. Explica que junto con sus hijos Gabriel y Sara convivían bajo el mismo techo con la señora María del Socorro, además que dependían económicamente de ella, por ser la que sufragaba los gastos de vivienda, alimentación, gastos médicos y demás necesidades para su hija y nietos. Narra que por su parte se ha dedicado al cuidado de sus hijos, ambos discapacitados, lo que no le permite trabajar y por tanto, no percibe ingreso alguno, padeciendo a la fecha de estrés mecánico por la movilización de sus hijos que se encuentran en sillas de ruedas. Solicitó en nombre de su hija la sustitución pensional por considerar acreditados los requisitos de una hija de crianza, recibiendo de Colpensiones respuesta negativa.

COLPENSIONES dio respuesta al libelo aceptando la calidad de pensionada de la fallecida y afirmando no constarle los hechos restantes con oposición a lo pretendido por considerar que no están satisfechos los requisitos de ley para hacerse beneficiaria la menos petente de la pensión de sobrevivientes. Como medio de defensa formuló las excepciones de mérito de Inexistencia de la obligación de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y retroactivo pensional, inexistencia de intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas, buena fe de Colpensiones, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación.

El 04 de febrero de 2022 el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia en la que DECLARÓ que Sara Elena Montoya Palacios representada por su madre, tiene derecho al pago de la sustitución pensional con ocasión de la muerte de María del Socorro Agudelo en calidad de hija de crianza inválida. CONDENÓ a Colpensiones a reconocer un retroactivo pensional causado desde el 06 de febrero de 2017 en cuantía del 100% del monto de la pensión de vejez que disfrutaba la causante. CONDENÓ a Colpensiones al reconocimiento de la indexación con absolución de las costas procesales.

La Sala en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conoce del asunto por el grado de consulta en favor de Colpensiones por resultarle la decisión plenamente desfavorable sin que fuera por alzada atacada la decisión.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que María del Socorro Agudelo Agudelo en su calidad de pensionada por vejez a través de la Resolución N° 2906 de 1998, falleció el 06 de febrero de 2017 (Pág. 25 Archivo 01), cuyo vínculo con la demandante es el de madre e hija, y con Sara Elena, quien cuenta con condición de invalidez no refutada por la entidad (Págs. 31-33 Archivo 01), el de abuela y nieta (Págs. 27 y 96 Archivo 01).

De cara a lo anterior, y atendiendo el grado de Consulta, el problema jurídico a resolver por esta Sala de Decisión se circunscribe a establecer, si la parte demandante acreditó en debida forma los requisitos de ley que hagan a Sara Elena Montoya Palacios beneficiaria de la prestación económica por sobrevivencia en calidad de hija de crianza de María del Socorro Agudelo Agudelo, cuyo óbito se presentó el 06 de febrero de 2017.

Pues bien, para resolver el asunto se tiene que la normatividad aplicable acorde a la teoría del hecho causante es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada, por lo que al haber ocurrido el deceso de la pensionada el 06 de febrero de 2017, debe aplicarse lo que dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, que señala los beneficiarios de la prestación, indicando textualmente y en lo que nos compete lo siguiente de cara al tema:

“c) Los hijos menos de 18 años; los hijos mayores de 18 años hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan sus condiciones de invalidez.

*”
...*

“PAR. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil”

En virtud de esta normativa bajo un análisis profundo del concepto de familia como institución esencial, cuya conformación desde una realidad dinámica se da de diversas formas, todas caracterizadas por lazos de afecto que unen a sus miembros por encima de cualquier formalidad, partiendo de la base de que la familia es el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños y resaltando el derecho fundamental a pertenecer a esta célula esencial (art. 42, 44 y 45 C.P.), y a no ser separados de ella, la H. Corte Suprema de Justicia desde la providencia SL1939 de 2020 definió que *“si un niño, niña o adolescente no tiene su familia biológica, o no se cumple la formalidad de la adopción, pero ha sido acogido por otro miembro, consanguíneo o no, y con él o ellos ha sido protegido durante cierto tiempo, lo necesario para que se hayan desarrollado vínculos afectivos entre esos integrantes, y ha dispensado al Estado de asumir residualmente esa tarea ante dicho abandono inicial, sería una contradicción, que frente a ese compromiso y solidaridad de quien quiso asumir el rol paterno o materno, posteriormente, no pueda ser protegido con las prestaciones del régimen jurídico, a efectos de mantener esa relación familiar”*, de donde surge la posibilidad que la coherencia aplicada a los derechos de los compañeros permanentes y las parejas del mismo sexo donde se da importancia a los lazos familiares que se construyeron por el afecto y la solidaridad, nazca también para efectos de la pensión de sobrevivientes del hijo de crianza dado el objetivo propio de esta prestación, postura que ha sido reiterada en providencias como las SL2415-2022, SL1192-2022, SL3044-2021 y SL3312-2020 .

Ahora, para merecer la protección de la seguridad social buscada a partir de esta postura recientemente adoptada, debe vislumbrarse contundencia en esa

relación materno-filial de forma tal que no sea el producto de un fraude o un aprovechamiento ilegítimo, para lo que la Alta Corporación dispuso que era requerido demostrar: 1) el reemplazo de la familia de origen; 2) los vínculos de afecto, protección, comprensión y protección; 3) el reconocimiento de la relación de padre y/o madre e hijo; 4) el carácter de indiscutible permanencia; y 5) la dependencia económica.

Para esa verificación, se cuenta de manera exclusiva con la investigación administrativa que se desplegó a través de un tercero (Archivo 04), de la que emerge que Sara Elena Montoya Palacios convivía con su abuela desde su nacimiento en una casa ubicada en el Municipio de Itagüí junto con su madre Blanca Inés Palacios, y su hermano Gabriel Jaime que también es discapacitado, siendo desplazados de Ciudad Bolívar desde 15 años atrás. En esa oportunidad fueron entrevistadas las señoras Ángela María Palacios Agudelo -tía de Sara Elena- y Carmen Tatiana Alzate Gómez -vecina-, quienes advirtieron que era la pensionada la que cubría todos los gastos de su hija y nietos, porque a Blanca Inés debido al cuidado permanente que merecen sus hijos no le es posible trabajar, sin que existiera otra persona que aporte para los gastos de la solicitante.

Con lo previo, aun cuando la conclusión del informe se dirigió a dar por demostrado el contenido y veracidad de la solicitud de Sara Elena Montoya tendiente a acreditar su calidad de hija de crianza frente a la causante, esta Sala de Decisión, se aparta de esa determinación final, en tanto si bien queda claro que entre la fallecida y su nieta existió una dependencia económica, se trata de un elemento que por sí solo no encuadra en esa relación de facto.

Es verdad que el rol que se alega puede darse con un pariente o familiar, pero es que el mecanismo demostrativo debe ir más allá de ese vínculo consanguíneo que por efectos naturales genera un vínculo afectivo sólido, y del suministro económico de sus necesidades básicas, porque esos aspectos no permiten colegir que María del Socorro Agudelo en su calidad de abuela haya asumido la maternidad de Sara Elena que es la prioridad de este criterio de protección. No se refuta que su previsión económica garantizó a Sara Elena, a su madre y a su hermano una calidad de vida en el entorno del

cubrimiento de sus necesidades primarias, pero es que el alcance de la norma de la mano con la intelección del concepto de familia diversa, es para quien ostente la calidad de hijo con desplazamiento de la familia biológica, donde es otra persona la que le otorga los mismos o mayores estándares de protección y cuidado, con hallazgo de unas condiciones personales y afectivas adecuadas para su proceso de educación y formación ciudadana, y un ambiente óptimo para que pueda desenvolverse en las distintas fases de su desarrollo físico, moral, intelectual y afectivo.

En ese orden, no puede hablarse que María del Socorro haya desplazado la familia de origen para hacerse cargo de Sara Elena Montoya en todos los aspectos que el rol materno comporta, sin que se tengan elementos que permitan llevar a esa relación por fuera de la interacción familiar y lo que implica el vínculo parental de madre - hija, y abuela - nieta en las precisas condiciones en las que se encontraba Blanca Inés de donde surge la consecuencia razonable de ayuda y solidaridad, sin que pueda pregonarse que de la causante provenía la asunción de las obligaciones que enlista el artículo 39 de la Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la adolescencia-, y de donde pudiera pregonarse la relación filial que avala la Corte, que recoge la protección a la dignidad e integridad personal, la formación y orientación, la colaboración con la escuela en la educación, asegurar los controles médicos, garantizar la permanencia en el ciclo educativo, la estimulación de expresiones artísticas y habilidades científicas, brindar condiciones de recreación, deportivas y culturales, prevenir e informar sobre los efectos nocivos de las sustancias psicoactivas, proporcionar un trato digno y generar condiciones de oportunidad y autonomía, pues de ese cometido se encargaba la madre Blanca Inés Palacios quien desprendía todo su esfuerzo y tiempo al cuidado de sus hijos y de ella partían los soportes de la crianza por conservar y ejercer la patria potestad, revelando lo anterior que no basta que la abuela diera el impulso monetario para concretar esos deberes legales y se presentara de ese modo una manifestación de protección, pues lo que debe reflejarse es que se haya exhibido una condición de madre respecto de Sara Elena Montoya con todo lo que ello implica, y lo que se muestra es la plena participación de la madre biológica en el bienestar y desarrollo cognitivo, emocional y social de sus descendientes con la intervención pecuniaria de una abuela que aunque

permanente, no se encuadra en el contexto de la persona que decidió asumir la protección y cuidado integral de una niña dentro del énfasis de una madre de crianza.

De ese modo, para esta Colegiatura no puede hablarse que Sara Elena Montoya haya sido prodigada por María del Socorro como una verdadera hija, pues esa calidad la conservó ante Blanca Inés Palacios, no contándose en ese orden con las condiciones familiares y sociales requeridas jurisprudencialmente para que a partir de una relación asimilable a una progenitora, sea la petente beneficiaria de la prestación que aquella percibía con base a lo que establece el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, circunstancias que imponen necesario promover la revocatoria de la decisión, para en su lugar disponer la absolución de las pretensiones a la administradora demandada.

En virtud a lo que establece el artículo 395-4 del CGP, en ambas instancias las costas son a cargo de la parte demandante, fijándose las agencias en derecho en esta sede en la suma de \$100.000.


DECISIÓN:

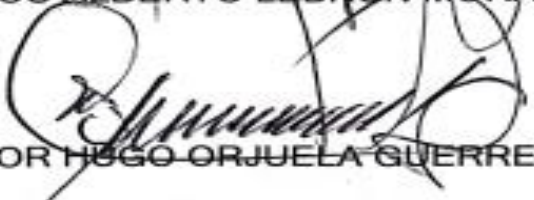
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA** la sentencia consultada, de fecha y procedencia indicadas en la que se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes para en su lugar, **ABSOLVER** a Colpensiones de las pretensiones de la demanda. Las costas como se indicó en la parte motiva.


Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Rad. 05001-31-05-020-2019-00267-01

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Rad. 05001-31-05-020-2019-00267-01

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310502020190026701
Proceso:	ORDINARIO LABORAL
Demandante:	BLANCA INES PALACIOS AGUDELO
Demandado:	COLPENSIONES
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	28/03/2023
Decisión:	REVOCA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 29/03/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

Secretario